



## Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:  
**Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)**

Para leer el texto completo de la licencia, visita:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

### Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra  
hacer obras derivadas

### Bajo las condiciones siguientes:



**Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



**No Comercial** — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

## **CONTROL DE CONVENCIONALIDAD COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

Cesar Alberto Arévalo.<sup>1</sup>

---

### **Resumen.**

Aquellos Estados que han adoptado la Convención Sobre los Derechos Humanos (DE SAN JOSE), como parte de su bloque de constitucionalidad tienen una serie de responsabilidades y obligaciones en materia de protección, garantía y satisfacción de las prerrogativas que emanan de dicho instrumento. Dentro de aquellos compromisos que impone el Sistema Interamericano, se encuentra la aplicación del control de convencionalidad, un principio que se fundamenta en la necesidad que las decisiones judiciales tomadas por los jueces sean concordantes con las estipulaciones determinadas en la Convención mencionada y con los precedentes e interpretaciones que sobre la misma ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, en su función consultiva y hermenéutica. Lo anterior, so pena de generar una responsabilidad a nivel internacional del ESTADO PARTE SIGNATARIO por su incumplimiento.

**Palabras clave:** Derechos humanos, Sistema Interamericano, Convención Americana, Corte IDH, Control de convencionalidad, Protección, Colombia.

---

<sup>1</sup> Estudiante de derecho de la Universidad Católica de Colombia, Facultad de Derecho, Programa de Pregrado. Artículo reflexivo para optar al título de abogado. Director: Dr. **OSCAR LUIS ÁLVAREZ** docente titular en la cátedra de Derecho Constitucional.

## **Conventionality control as a mechanism for the protection of human rights.**

Cesar Alberto Arévalo.

---

### **Abstract.**

Those States that have adopted the Convention on Human Rights as part of their constitutional block have a number of responsibilities and obligations in terms of protection, guarantee and satisfaction of the prerogatives that emanate from that instrument. Among the commitments that the Inter-American System imposes is the application of the control of convention, a principle that is based on the necessity that the judicial decisions taken by the judges are in agreement with the stipulations determined in the mentioned Convention and with the pertinent ones and Interpretations that the Inter-American Court has carried out on it. The above, under penalty of generating a responsibility at international level for its non-compliance.

**Keywords:** Humans rights, Interamerican system, American convention, Inter-American Court, Convention control, Protection, Colombia.

## **Sumario.**

Introducción.

**1.** Los derechos humanos.

**2.** El sistema interamericano de derechos humanos.

**3.** El bloque de constitucionalidad.

**4.** El control de convencionalidad y su aplicación por parte de los jueces dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Conclusiones.

Referencias.

## **Introducción.**

La protección a los derechos humanos es una lucha que se ha venido dando a nivel internacional desde hace ya varios años, es por ello, que se han implementado una serie de instrumentos normativos encaminados a la defensa, promoción, goce y satisfacción de las prerrogativas universales que le son inherentes a todos los individuos humanos independientemente de su raza, credo, filiación política, género u orientación sexual.

Instrumentos que han sido adoptados por distintos Estados quienes los han incluido al interior de su bloque de constitucionalidad, haciéndolos parte de sus ordenamientos jurídicos con el fin de cumplir con las obligaciones que a nivel internacional imponen los tratados y convenciones que hayan sido reconocidas, y evitando de esta manera, las fuertes sanciones que se pueden imponer al no garantizar la protección de los derechos humanos.

Es así, que a nivel regional es posible encontrar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se compone por la Comisión Interamericana y la Corte IDH, la cual quien interpreta las estipulaciones contenidas en la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos (DDHH) o Pacto de San José de Costa Rica como también es conocido. Este instrumento impone determinadas obligaciones en materia de protección de derechos humanos a los Estados que son parte, entre ellos Colombia.

Ahora bien, una de las obligaciones que tiene Colombia como Estado PARTE del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es la aplicación del control de convencionalidad, el cual se basa en que todas las decisiones judiciales que se tomen a nivel interno deberán ser concordantes y concomitantes con las prerrogativas inmersas al interior de la Convención Americana. De igual manera, las providencias proferidas tendrán que estar acordes con las

interpretaciones que sobre la Convención misma ha realizado la Corte IDH a través de sus sentencias.

Lo anterior, con el fin de que la protección de los derechos humanos como obligación estatal sea una realidad que debe materializarse de diversas formas, entre ellas, a través de las normas internas y de las decisiones de los jueces. Es por ello, que dentro de esta investigación se genera un interrogante que hace referencia en cuanto a ¿qué implicaciones tiene para el Estado colombiano el soslayar la aplicación del control de convencionalidad propuesto por el sistema interamericano de derechos humanos?

El problema jurídico planteado se fundamenta en las obligaciones adquiridas por Colombia a nivel internacional. Por lo tanto, se hace necesario tener claridad acerca del compromiso que tiene el Estado en cuanto a la aplicación de todos los mecanismos que han sido enfocados en la protección de los derechos humanos, los cuales se desarrollan y reglamentan mediante las normas tanto nacionales como internacionales.

Esto es así, ya que el cumplimiento en cuanto a la aplicación de dichos instrumentos, tiene como consecuencia que el Estado no responda ante los organismos internacionales por fallar en su obligación de proteger, salvaguardar, defender y garantizar el goce, promoción y satisfacción de las prerrogativas inmersas en las disposiciones que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del bloque de constitucionalidad.

Por lo tanto, como objetivo general se pretende dilucidar cuáles son las implicaciones que se pueden suscitar a nivel internacional en contra del Estado colombiano, debido a la no aplicación del control de convencionalidad en las decisiones emanadas por parte de los operadores judiciales.

Con el fin de desarrollar el problema jurídico planteado y el objetivo general propuesto, se realizará un respectivo estudio doctrinal y jurisprudencial que permita identificar las consecuencias que tiene para Colombia la no aplicación del principio de convencionalidad. De igual manera, se analizarán las demás obligaciones adquiridas por el Estado colombiano

al adoptar la Convención Interamericana de Derechos Humanos como parte de su bloque de constitucionalidad.

Lo anterior, permitirá conocer dentro de esta investigación los pros y los contras que tiene para Colombia que sus jueces cumplan o no con la aplicación del control de convencionalidad. Especialmente, cuando en la actualidad nuestro país se encuentra en un proceso de transición muy importante debido al desescalamiento de la guerra interna, esto, gracias al reciente acuerdo de paz logrado con uno de los actores del conflicto y con los posibles diálogos que puedan iniciarse con otros grupos armados al margen de la ley.

Situación que hace imprescindible un adecuado conocimiento y aplicación de los precedentes e interpretaciones que ha realizado la Corte IDH sobre la Convención Americana, especialmente, a la hora de reparar a las víctimas y al momento de garantizar las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar los hechos que originaron los daños irrogados a los individuos que reclaman justicia y reparación.

### **1. Los derechos humanos.**

Los derechos humanos han sido un objetivo por el que se ha luchado de manera inagotable, especialmente, durante los últimos 70 años. Ejemplo de esto es que una vez finalizada la segunda guerra mundial, la recién creada Organización de la Naciones Unidas (ONU), adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el día 10 de diciembre de 1948, a través de ella se estableció “por primera vez en la historia de la humanidad, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar” (Ohchr.org. 2017).

En el mismo sentido, (Agudelo y Galán, 2015, citando a Spaemann, 1989, p. 55), en cuanto a la finalización de la segunda Guerra Mundial y la consolidación de los derechos Humanos refirieron lo siguiente:

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Derecho Internacional presentó un importante avance en cuanto a acuerdos y pactos internacionales, que permite hablar de una legalidad internacional. Asimismo, se han proferido documentos de vinculación

universal, cuyas esencia y naturaleza van dirigidas a la dignidad humana. Tal es el caso de la Carta Universal de los Derechos Humanos. (p. 124-125)

Ahora bien, hay que decir que la declaración fundamenta el otorgamiento de los derechos humanos en la dignidad e igualdad que le son inherentes a los seres humanos. Con base en ello, es que a través de este instrumento se promueve para todos los individuos el respeto, protección y garantía por la vida, la libertad, la seguridad, la no discriminación y demás prerrogativas contenidas al interior del mismo. “El derecho de los derechos humanos proporciona normas universales que se aplican a todas las personas” (ACNUDH, 2010, p. 51).

Por lo tanto, los derechos humanos son un sistema de valores que es común a todas las naciones y que han acompañado la evolución que la sociedad ha tenido a lo largo de los años, cuyo núcleo esencial, es la dignidad humana y que a su vez, orientan los ordenamientos jurídicos internos de los países que han adoptado y ratificado la declaración. En consecuencia, los derechos humanos ponen al descubierto las condiciones socioeconómicas y políticas de los Estados que impiden su completa realización (Sorondo, 1998, p. 2).

Lo anterior significa, que en aquellas naciones en vía de desarrollo, las cuales cuentan con menos recursos económicos y en donde se viven ambientes políticos y sociales hostiles, y que además se encuentran permeados por actos de corrupción, desigualdad social, desempleo, guerra, bajos niveles de educación, precarios sistemas de salud, difícil acceso a oportunidades de empleo y demás circunstancias que se puedan considerar violentas, degradantes y desiguales para las personas, son proclives a una mayor vulneración de los derechos humanos. Como bien mencionó Arcos (2002):

[El] proceso de universalización de los derechos humanos está aún lejos de haberse completado y, por momentos, da la impresión de estar condenado a no pasar de ser más que una aspiración ética y jurídica. En gran medida, ello obedece a las dificultades que conlleva lograr que los Estados trasciendan la retórica de las declaraciones políticas y asuman coherentemente las obligaciones derivadas de la prestación de su consentimiento en los tratados internacionales sobre esta materia. (p.13)



En consecuencia, los derechos humanos hoy en día deben entenderse como parte fundamental para el desarrollo de las sociedades, “de hecho, podría decirse que los Derechos Humanos constituyen actualmente la expresión generalizada del ideal de Justicia, con una dimensión y alcance prácticamente universal, en los diversos países, culturas y continentes” (Blázquez, 2013, p. 125).

En cuanto a la definición y significado de los derechos humanos, lo que se ha mencionado con anterioridad da una muestra de que es un concepto universal, que son prerrogativas que les corresponden a todas las personas sin importar cuál es su origen, su raza, sexo, condición económica o posición social. Del mismo modo, la noción de DDHH se encuentra implícitamente relacionada con el desarrollo de las sociedades, y su promoción y defensa se hacen prioritarias al interior de las políticas públicas de los Estados, aunque su materialización sea un asunto difícil de lograr en muchas naciones, como por ejemplo Colombia.

Por su parte, (Mena, Montaña y Ramírez, 2011, citando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1948), definen a los DDHH en las siguientes palabras:

[...] los derechos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, estos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. (p. 21)

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T- 535/15 con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, al referirse acerca de los derechos humanos, expresó lo siguiente:

“Los derechos humanos son intereses vitales de la humanidad que prescriben la dignidad de la persona frente al Estado. A la luz de esta concepción que hace parte de

los principios irradiadores de nuestro ordenamiento constitucional, la razón de ser de las ramas del poder público no es otra que la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos; actuar contra ello, es desconocer siglos de evolución en busca de la racionalidad humana”.

De la anterior definición se logra apreciar que los derechos humanos exaltan la dignidad de las personas y son la base fundamental de los principios y normas que rigen a un Estado Social de Derecho, en donde se convierten en la razón de ser de las ramas del poder público. Por lo tanto, todas las actuaciones del Estado deben ejecutarse teniendo en cuenta el respeto, garantía y promoción de estas prerrogativas. Sin embargo, como los expresan Amar, Macías y Madariaga (2005):

Aunque garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en cada nación es una decisión política, su práctica depende en gran medida de la dinámica psicosocial marcada por un entorno cultural. La protección de los derechos humanos no depende únicamente del diseño jurídico de normas, del consenso político favorable, o de las formas de control existente, sino más bien del sentido que los pueblos le dan a los principios inherentes a cada derecho y cómo éstos se realizan en lo cotidiano. (p. 1)

Por lo tanto, para que se haga realidad una efectiva práctica de los derechos humanos a nivel social dentro de una nación, es preciso que sus habitantes posean conciencia de lo que ellos representan, ya que no basta con un amplio escenario normativo en donde se protejan dichas prerrogativas, sino que se hace imperiosa la promoción, la enseñanza y el fomento de las mismas para generar de esta manera, un alto grado de conciencia y apropiación. Puesto que los DDHH, son parte inherente de la esencia y de la naturaleza del ser humano, “son mínimos de justicia debidos socialmente al prójimo” (Ruiz, 2011, p. 93).

## **2. El sistema interamericano de derechos humanos.**

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, comienza a gestarse a raíz de las necesidades y preocupaciones expresadas en la *Conferencia Interamericana sobre la Paz y la Guerra* celebrada en Ciudad de México entre los días 21 de febrero al 8 de marzo de 1945 (fecha próxima a la finalización de la segunda guerra mundial) por aquellos Estados que más adelante conformarían la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Faúndez, 2004, p. 36).

Dichas preocupaciones tenían su fundamento en la necesidad de que en la región se contara con un instrumento que permitiera la regulación, protección y satisfacción de los derechos humanos, ya que hasta ese momento no se contaba con ninguno. Lo anterior, en respuesta a los difíciles momentos por los que estaba transitando la humanidad debido al conflicto bélico que se encontraba en vísperas de su culminación y que hasta esa fecha, había dejado millones de víctimas mediante innumerables actos barbáricos que vulneraron toda clase de prerrogativas que hoy en día se encuentran protegidas.

Ahora bien, con la conformación de la OEA a través de la *Carta de la Organización de Estados Americanos* del año 1948 y con la adopción de la *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre*, se comenzaron a sentar las bases para la creación de instrumentos definitivos que a nivel regional contuvieran aquellos derechos y prerrogativas que le son inherentes a la persona humana y que igualmente, regularan la manera como los mismos deberían ser protegidos de forma vinculante y obligatoria por todos los Estados asociados sin distinción alguna de raza, nacionalidad, credo, sexo o condición económica (Medina y Nash, 2007, p. 14).

Vale aclarar, que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre si bien es cierto, se constituyó como el primer instrumento generalizado en materia de protección de los derechos humanos a nivel regional, no obstante, no adquirió un carácter vinculante para los Estados que conformaron la OEA, ya que la declaración no posee la fuerza jurídica de un tratado internacional. Sin embargo, “si tiene un valor moral, constituyendo un ideal que los pueblos americanos habían intentado alcanzar, después de muchas controversias” (Añaños, 2016, p. 139).

Es así, que una vez constituida la OEA y adoptada la Declaración mencionada con anterioridad, el siguiente paso que se dio para la consolidación de un Sistema Interamericano para la protección de los derechos humanos, fue la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1959 que nació como respuesta a la necesidad de crear una Corte que juzgara las violaciones y transgresiones cometidas, pero que debido a la falta de derecho sustantivo que regulara aspectos atinentes a la protección de DDHH en la región no era posible crearla en el momento (Añaños, 2016, p. 144).

Por lo tanto, la *Comisión Interamericana de derechos humanos* nació con el objetivo de promover el respeto y promoción de las prerrogativas que le son inherentes a las personas. De acuerdo con la Oas.org. (2017), “[la] CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”. Cuya función principal es la de promover la observancia y defensa los derechos humanos en la región americana.

Por su parte, la *Comisión Americana de Derechos Humanos* se encuentra integrada por 7 comisionados que ejercen su función por un periodo de 4 años y con el fin de cumplir con sus propósitos, este organismo internacional analiza e investiga las peticiones por medio de las cuales se alega la violación de derechos humanos por parte de los Estados miembros de la OEA. De igual manera, realiza observaciones e informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en todos los Estados, para ello, puede valerse de lo que se denomina como las visitas *in loco*, que de acuerdo con Santoscoy (2007):

[...] constituyen el método más utilizado por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros, para observar los estándares nacionales de protección de derechos humanos. (p. 607)

Igualmente, como funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran las de estimular la conciencia pública acerca del respeto por estas prerrogativas, organizar visitas, seminarios, conferencias y demás actividades que permitan divulgar y fomentar el conocimiento del Sistema Interamericano como mecanismo de protección,

solicitar la adopción de medidas cautelares con el fin de prevenir daños a las personas objeto de la decisión o con la finalidad de que los hechos que originan dicho perjuicio cesen, presentar los casos ante la Corte IDH, propender por una solución amistosa entre las partes en conflicto, entre otras (Oas.org, 2017).

Con referencia a la solución amistosa, hay que decir, que es un instrumento que permite solucionar el conflicto a través del diálogo con el fin de evitar que el mismo llegue ante instancias de la Corte IDH y que a su vez, busca conseguir que el Estado se comprometa a investigar y sancionar a los responsables de los hechos que originaron el daño, así como a otorgar medidas de reparación que benefician a las víctimas. Dicho mecanismo debe usarse, antes de que el caso se traslade a la competencia del tribunal internacional que se encargará de juzgar la responsabilidad del Estado comprometido en las situaciones que son objeto del debate.

En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se prevé que los litigios entre los Estados y las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus representantes puedan resolverse a través de un acuerdo amistoso. En este arreglo, llevado a cabo ante los órganos regionales de protección de los derechos humanos, el Estado se somete por voluntad propia a un proceso de solución amistosa, que no implica perse un reconocimiento de responsabilidad internacional por parte suya, sino apenas un cumplimiento de buena fe de los propósitos de la Convención, proceso en el que se compromete a investigar y juzgar a los responsables, y adopta compromisos en materia de reparación a los afectados; las víctimas, por su parte, renuncian a llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la Comisión Interamericana vela por la coherencia del acuerdo en relación con la normatividad interamericana y ostenta un papel de observador independiente. (Estepa, 2011, p. 327)

Por otro lado, de forma posterior a la creación de la CIDH como parte del Sistema Interamericano, se adoptó por la OEA la *Convención Interamericana de Derechos Humanos* en el año 1969. Un instrumento que se convirtió en el elemento principal, en aquel factor cardinal en el que se basan los Estados miembros de la Organización y que tiene por finalidad

el garantizar la protección y promoción de todas las prerrogativas que le son inherentes a todos los individuos humanos.

La Convención estableció derechos humanos con un contenido definido y también detalladas obligaciones para los Estados, que fueron posteriormente desarrolladas por la ya existente Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano nuevo creado en ese tratado, que entró en funciones en 1978. (Medina, 2009, p. 16)

Por lo consiguiente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos le impone a los Estados determinadas obligaciones que son de estricto cumplimiento so pena de ser sancionados en caso de no velar por la observancia de las estipulaciones contenidas al interior de este instrumento jurídico internacional.

Finalmente, a través de la Convención mencionada anteriormente, se creó en el año de 1979 el otro órgano que compone el Sistema Interamericano. Se trata de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se erige como “uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos”. (Corte IDH, 2013, p. 7).

Dicho órgano judicial internacional tiene como función, la resolución de los casos contenciosos que se presentan ante el mismo por la presunta responsabilidad en la violación de los derechos humanos por parte de los Estados que adoptaron su jurisdicción. Del mismo modo, tiene por función la de interpretar y aplicar las disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento a través del cual basa sus decisiones para determinar de esta forma, la responsabilidad del Estado que juzga, así mismo, la Corte IDH también realiza dentro de sus funciones, la supervisión del cumplimiento de sus sentencias.

Del mismo modo, La Corte IDH también cuenta con una función consultiva que le otorga “la facultad de responder consultas que le sean formuladas dentro del marco del artículo 64°

del Pacto de San José” (Nikken, 2007, p. 161). Esto quiere decir, que este tribunal responde las inquietudes que tienen los Estados con relación a la compatibilidad de las normas internas respecto de la Convención o preguntas encaminadas en la interpretación de la convención y demás tratados creados para la protección de los DDHH.

Por otro lado, la Corte IDH, Tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica y se encuentra integrada por 7 jueces de distintas nacionalidades que cumplen sus funciones en un periodo de 6 años y ante ella, solo pueden acudir con el fin de someter un caso a su decisión los Estados Americanos y la Comisión Interamericana. Por lo tanto, cuando un individuo quiera presentar una demanda ante el Sistema Interamericano, deberá acudir primero a la Comisión, quien luego de analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y luego de escuchar a la partes en procura de que el conflicto se resuelva a través de la solución amistosa, decidirá enviar el asunto a la jurisdicción del tribunal.

Se dice entonces, que el Sistema Interamericano de derechos humanos se encuentra conformado por la Comisión Interamericana y la Corte IDH y que a su vez, se rige bajo las estipulaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que impone una serie de responsabilidades de obligatorio cumplimiento para todos los Estados que la adoptaron y la adhirieron a su bloque de constitucionalidad.

El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, se ha constituido en un mecanismo de especial relevancia dentro del contexto regional a la hora de exigir a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones convencionales en materia de derechos humanos. (Carvajal, 2015, p.31)

Por lo tanto, es un instrumento de vital importancia a nivel regional que permite reivindicar los derechos que constantemente son vulnerados a todos los individuos, especialmente, en un país como Colombia en donde debido a las características propias del conflicto, el narcotráfico y a los niveles de violencia que se presentan en su interior, hace que dichas circunstancias sean propicias para la transgresión de las prerrogativas que le son inherentes a las personas.

### **3. El bloque de constitucionalidad.**

El bloque de constitucionalidad es un fenómeno jurídico proveniente del derecho francés el cual surgió “mediante un esfuerzo dogmático”, (Caicedo, 2009, p. 7), este instrumento ha sido adoptado por múltiples legislaciones ya que permite realizar un mayor control constitucional frente a determinadas normas, puesto que través de dicha institución jurídica se hace posible “contemplar dentro del ordenamiento jurídico interno la posibilidad de incorporar normativas de carácter internacional consagradas en los tratados que se suscriban” (Olarte, 2016, p. 7). Por lo tanto, dicho instrumento normativo debe ser reconocido en primera instancia como un control de legalidad.

En Colombia el bloque de constitucionalidad se encuentra consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política, el cual dispone que los derechos y deberes que se consagren en la norma superior, serán interpretados de conformidad con lo que establezcan los tratados que en materia de derechos humanos hayan sido ratificados por Colombia. Esto implica el carácter vinculante que la constitución le otorga a dichas normas, llevándolas a un nivel jerárquico propio de la Carta Política.

En cuanto a su definición, se logra observar a través de los distintos doctrinantes que la misma se encuentra enfocada en describir al bloque de constitucionalidad como un grupo de normas que aunque no se encuentren incluidas dentro del articulado de la Constitución, sí tienen un carácter y jerarquía constitucional. Esto es, que se encuentran al mismo nivel de la Carta Política y que por lo tanto deben ser tenidas en consideración en el entendido, de que no se puede actuar en contravía de ellas.

Es así, que Olarte (2016) define al bloque de constitucionalidad como “un conjunto de normas interpuestas; esto quiere decir, que el bloque de constitucionalidad se configura a través de la inclusión de normas que no se encuentran consagradas en la Carta Política” (p. 8). Por consiguiente, este fenómeno jurídico lo que hace es otorgar una jerarquía



constitucional a las normas que no se encuentran inmersas al interior de la Constitución Nacional.

Por lo tanto, de acuerdo con este autor el bloque de constitucionalidad se erige como un grupo normativo que sin necesidad de encontrarse incluido dentro de las disposiciones propias de la Constitución Política, adquiere un rango constitucional con el fin de ejercer un control de constitucionalidad mucho más amplio frente a otras normas que se dicten al interior del sistema jurídico interno del Estado.

A través del bloque de Constitucionalidad “se formaliza la pertinencia en el contenido normativo de la constitución de los tratados y convenios de derechos humanos, con lo cual, adquiere rango equivalente a norma constitucional, y por ende, ingresan a la constitución” (Rey Cantor, 2006) Citado por (Olarte, 2016, p. 10). De forma similar, Monar (2016) indica que el bloque de constitucionalidad sirve de:

[...] parámetro para revisar la constitucionalidad de las normas que conforman el plexo jurídico colombiano. Desde esta perspectiva, el bloque se encarga de entronizar como si se tratara de la Constitución Política toda norma o principio que está fuera de ésta, pero que por su valor e identidad constitucional ingresa al sistema jurídico como norma igualmente superior. (p. 7)

En el mismo sentido, Arango (2004) cita la sentencia C-225/95 de la Corte Constitucional, por medio de la cual se define al bloque de constitucionalidad de la siguiente forma:

El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. (p. 79)

De igual manera, en palabras del profesor colombiano (Gabriel Mario Mora Restrepo, citado por Rodríguez, 2016), el bloque de constitucionalidad se puede entender de la siguiente forma:

El bloc de legalité desarrollado más tarde como bloc de constituttionalité, consiste en asumir que existe un conjunto de normas que sin ser consagradas expresamente en la Constitución, hacer parte de ella por la decisión de un juez o por expresa disposición del constituyente. (p. 95)

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-327/16 definió al bloque de constitucionalidad como el “conjunto de normas, reglas y principios, consagrados explícitamente en la constitución, o incorporados a partir e remisiones contenidas en el texto superior, que operan como parámetro de control de constitucionalidad de las leyes”.

De igual manera la Corte Constitucional explica que el bloque de constitucionalidad, en sentido estricto se refiere a las normas integradas a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta y otro en sentido lato como “aquellas disposiciones que tienen un rango normativo superior al de las leyes ordinarias, aunque a veces no tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que sirven como referente necesario para la creación legal y para el control constitucional”

Las anteriores definiciones explican al bloque de constitucionalidad como el conjunto de normas que se encuentra integrado por aquellas disposiciones, que no tienen necesidad de hallarse inmersas en los articulados de la Constitución Política, ya que adquieren un rango y jerarquía constitucional en virtud expresada por constituyente mismo. Por lo tanto, el bloque de constitucionalidad pretende: “transmitir la idea de que la Constitución no solamente se circunscribe a lo que se encuentra escrito dentro de ella, sino que existen otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones, que también son normas de la misma jerarquía”. (Corte Constitucional, sentencia C-458/15. M.P. Gloria Ortiz Delgado).

No obstante, las reglas que integran el bloque de constitucionalidad en el control abstracto deben ser interpretadas sistemáticamente con la Carta Superior. A su vez, el bloque de

constitucionalidad cumple dos funciones en el control constitucional, uno de carácter integrador y otro interpretativo, con base en el cual se ha establecido que los pronunciamientos internacionales deben ser tenidos en cuenta como criterio de interpretación de los derechos fundamentales.

En cuanto a la función que cumplen las normas que componen el denominado bloque de constitucionalidad, la sentencia C-067/03, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra expresó lo siguiente:

*Dado el rango constitucional que les confiere la carta, las disposiciones que integran el bloque superior cumplen la cuádruple finalidad que les asigna Bobbio, a saber, servir de i) regla de interpretación respecto de las dudas que puedan suscitarse al momento de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad cuando no exista norma directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las funciones del operador jurídico, y iv) la de limitar la validez de las regulaciones subordinadas.*

Lo que implica, que dicha normatividad sirve como forma de suplir vacíos legales existentes dentro del ordenamiento jurídico, así como mecanismo como control y de orientación tanto de jueces como de las mismas normas internas del Estado y finalmente frente a su aplicación y como instrumento hermético de interpretación de la mismas cuya finalidad es la de servir de “parámetro guía en la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a los derechos fundamentales”. (Corte Constitucional, sentencia C-488/09, M.P. Jorve Iván Palacio)

A su vez, Rodríguez (2016) cita otro aparte de la sentencia C-225/95 emitida por la Corte Constitucional, a través del cual se amplía un poco más el concepto de bloque de constitucionalidad con las siguientes palabras:

*[...] el bloque de constitucionalidad, va más allá de una norma que se utiliza para ejercer control constitucional, también busca unificar el sistema normativo nacional e influye en el alcance de los recursos constitucionales sobre derechos humanos. Un caso ocurre cuando la acción de tutela, si bien no puede invocar directamente la*

*violación del bloque de constitucionalidad, sí puede acudir a la interpretación más amplia de los derechos fundamentales por medio del bloque. (p. 272)*

En este aspecto, cuando la Corte se refiere a unificar “el sistema normativo nacional e influir en el alcance de los recursos constitucionales sobre derechos humanos” implica la armonización en cuanto a la prevalencia de la Constitución frente a los tratados internacional, con el objetivo principal de que estos últimos no tengan un carácter supraconstitucional, sino que se encuentren en el mismo nivel jerárquico que posee la propia Constitución. Situación que permite contar con mayores herramientas al momento de realizar control de constitucionalidad.

Lo anterior evidencia uno de los objetivos de mayor trascendencia que tiene el bloque de constitucionalidad, el cual consiste en servir como un instrumento de recepción del derecho internacional., ya que a través de este fenómeno, es que el Estado logra que los tratados internacionales que ha ratificado especialmente, en materia de derechos humanos, adquieran fuerza vinculante al interior de sus ordenamientos jurídicos a tal punto, de equiparlos al nivel jerárquico que posee la Constitución Política.

Por otro lado, es posible hablar de acuerdo con (Quinche, 2009) de una definición en sentido estricta del bloque de constitucionalidad y otra en sentido amplio o lato. La primera, se refiere a que el bloque de constitucionalidad se encuentra conformado por las normas del preámbulo, el articulado constitucional, tratados de límites ratificados por Colombia, tratados de derecho Humanitario, los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles y principios constitucionales; es decir, por el contenido constitucional como la doctrina elaborada por los diferentes tribunales Internacionales tenidos en cuenta como criterio relevante de interpretación.

Por otra parte en sentido lato, refiere el autor que el bloque de constitucionalidad se encuentra conformado por aquellas normas que sirven como parámetro de interpretación para el ejercicio del control de constitucionalidad como lo es los Convenios y tratados públicos ratificados por Colombia referidos en Derechos Humanos, la Doctrina realizada por los

Órganos de Control Internacional sobre los derechos humanos, las leyes orgánicas y estatutarias definición que permite un control constitucional mucho más amplio y efectivo.

En consecuencia, los instrumentos que componen el bloque de constitucionalidad de acuerdo con Suel- Cock (2016, p. 329) son: los tratados de límites, los instrumentos del DIH como lo es el Convenio de Ginebra y el Protocolo II sobre derechos internacional humanitario, tratados internacionales en materia de DDHH como por ejemplo la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, algunos convenios de la OIT como por los son los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical, la convención Contra la Tortura de 1984, los instrumentos de protección de los derechos del niño, entre otros.

Sumado a lo anterior, se incluye el preámbulo y articulado de la constitución y las leyes orgánicas y estatutarias. Ya que en sentido lato el bloque de constitucionalidad comprende:

[...] aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no solo por el articulado de la Constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias. (Suel- Cock, 2016, pp. 328-329)

Por su parte, Botero (2009) con referencia al bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato expresó lo siguiente:

Como ya se mencionó, la importancia del *bloque de constitucionalidad en sentido estricto*, para los operadores jurídicos radica en que las normas que lo integran tienen jerarquía constitucional. En consecuencia, tales normas son aplicables directamente por todos los operadores jurídicos, en distintos procesos constitucionales y ordinarios. Por su parte, las normas del bloque de constitucionalidad lato sensu deben ser tenidas en cuenta a la hora de considerar la acción o la excepción de constitucionalidad-

implicación de una norma legal o reglamentaria por violación de la constitución – o de interpretar las disposiciones constitucionales y legales. En todo caso, a este respecto, resulta relevante señalar que la Corte Constitucional ha establecido que cuando exista un conflicto entre legislación interna y las normas internacionales, el juez debe proferir aquella disposición que sea más favorable para el goce y la protección de los derechos. (p. 31). CITA MUY EXTENSA

Lo que quiere decir según la autora, que el bloque de constitucionalidad es un parámetro de aplicación de carácter obligatorio para los operadores judiciales al momento en que decidan sobre diferentes asuntos según su especialidad. Esto es así, debido a que esta institución jurídica abarca todos los ámbitos legales en virtud del fenómeno normativo de la constitucionalidad del derecho, por lo tanto, independientemente del asunto que sea, civil, penal, constitucional, administrativo y demás, se deberán observar las reglas del bloque de constitucionalidad sea en sentido estricto o sentido lato puesto que, ello implica un respeto general por la Carta Política de Colombia.

Además, de brindar una mayor seguridad jurídica ya que se da cumplimiento a las obligaciones internacionales que se le imponen al Estado Social de derecho, el cual tiene como uno de sus fines esenciales el “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Art. 2, C. P), para todos los miembros del conglomerado social, algo que se logra a través de las acciones de todos los órganos que conforman el Estado, incluidos los operadores judiciales.

En resumen, el bloque de constitucionalidad es un instrumento legal que sirve como medio de control de constitucionalidad frente a las leyes que se expidan al interior del sistema jurídico, circunstancia que impacta directamente en las decisiones que tomen los jueces en sus asuntos. A su vez, el bloque de constitucionalidad se encuentra conformado por una serie de normas que se adhieren de forma sustancial ya que las mismas pueden no encontrarse inmersas de forma taxativa en la constitución, sin embargo, adquieren rango constitucional. Por lo tanto, es deber del juez considerar dichas estipulaciones al momento de realizar valoraciones de carácter normativo.

## FALTO EL CARÁCTER JURIDICO VINCULANTE RECONOCIDO A LA DECLARACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE AMERICANA

### **4. El control de convencionalidad y su aplicación por parte de los jueces dentro del ordenamiento jurídico colombiano.**

El control de convencionalidad es una institución jurídica desarrollada a partir de la jurisprudencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos en aplicación del pacto de San José. De acuerdo con la doctrina en general, la primera referencia sobre el control de convencionalidad es posible hallarla en la sentencia del caso *Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*, en donde la Corte IDH se manifestó de la siguiente manera:

*124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. MUY EXTENSA*

Lo anterior implica, que el control de convencionalidad es un instrumento que permite efectuar una confrontación en cuanto a la compatibilidad existente entre la normatividad interna de los Estados, frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y que tiene como objetivo, el ratificar las obligaciones que se le imponen al Estado a nivel

internacional al momento de ejecutar cualquier acción a través de sus órganos constitutivos, como por ejemplo la expedición de normas, las cuales no deben ir en contravía de los objetivos de la Convención.

En el mismo sentido, el Consejo de Estado en sentencia del 3 de diciembre de 2014, radicado (35413), Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio, expresó lo siguiente:

*3.2.1.1.- El control de convencionalidad es una manifestación de lo que se ha dado en denominar la constitucionalización del derecho internacional, también llamado con mayor precisión como el “control difuso de convencionalidad,” e implica el deber de todo juez nacional de “realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.*

Ese control de convencionalidad por parte de los jueces nacionales lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así:

*“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”*

Por consiguiente el Control de Convencionalidad parece tener su origen en la sentencia proferida en el “caso Almonacid Arellano y otros vs Chile,” lo cierto es que desde antes del



2002, e incluso *en* la jurisprudencia de los años noventa de la Corte Interamericana de Derechos, ya se vislumbraban ciertos elementos de este control de convencionalidad, pues allí se afirma que constituye una obligación en cabeza del poder judicial ya que “cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella.

Lo anterior indica claramente que el juez nacional no sólo está llamado a aplicar y respetar su propio ordenamiento jurídico, sino que también debe realizar una “interpretación convencional” para determinar si aquellas normas son compatibles con los mínimos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los demás tratados y preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario

Como puede observarse, el control de convencionalidad no es una construcción jurídica aislada, marginal o reducida a sólo el ámbito del derecho interamericano de los derechos humanos. Por el contrario, en otros sistemas de derechos humanos, como el europeo, o en un sistema de derecho comunitario también ha operado desde hace más de tres décadas, lo que implica que su maduración está llamada a producirse en el marco del juez nacional colombiano.

Asimismo, la aplicabilidad oficiosa e imperativa del control de convencionalidad conforme a la cual ha sostenido el deber de los funcionarios en general, y en particular de los jueces, de proyectar sobre el orden interno y dar aplicación directa a las normas de la Convención y los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo tanto, el control de convencionalidad se erige como un mecanismo que debe ser aplicado de manera obligatoria por parte de los jueces internos de un Estado, cuya finalidad es la protección de los derechos humanos de todos sus asociados a través de la aplicación de normas que sean acordes y compatibles con las estipulaciones contenidas en la Convención Americana sobre DDHH. Esto, como consecuencia de las responsabilidades y obligaciones

internacionales que el mismo instrumento les impone a los Estados que adoptaron y ratificaron el Tratado Internacional. En palabras de Franco (2013):

El origen del control de convencionalidad está directamente relacionado con la fuerza vinculante que tienen las obligaciones contraídas por un Estado por medio del proceso de ratificación de tratados internacionales para todos los poderes del Estado, entendidos estos como el legislativo, ejecutivo y judicial en todas sus expresiones, tanto normativas como fácticas. (p. 12)

En el mismo sentido, Rincón (2013) expresa que los jueces nacionales no solo deben aplicar la norma interna existente en el ordenamiento jurídico del Estado al que pertenezcan, sino que, además, deben interpretarlas de acuerdo con las estipulaciones contenidas en los Tratados Internacionales que hayan sido ratificados en materia de derechos humanos:

Los jueces nacionales deben ir más allá de la simple aplicación de la ley nacional, pues tienen la obligación de llevar a cabo una interpretación conjunta con las normas supranacionales, verificando la compatibilidad de las mismas con el caso a decidir; de lo contrario, su proceder conllevaría a una violación internacional de derechos fundamentales. (p. 200)

Esto significa que, debido a la ratificación y adopción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los Estados parte deberán tener en consideración no solo la aplicación de las normas que se encuentren inmersas dentro de su ordenamiento jurídico interno, sino que además, se encuentran obligados a contemplar la aplicación de las disposiciones contenidas en este caso, en la Convención Americana de Derechos Humanos. A su vez, dicha obligación no se encuentra solamente en cabeza del poder judicial, sino que es deber también del ejecutivo y del legislativo considerar todas las estipulaciones emanadas por la Convención en cualquiera de sus actuaciones.

Así mismo, se hace perentorio como deber de los jueces el dar una interpretación correcta a las sentencias emitidas por el tribunal del Sistema Interamericano que se encarga de juzgar

a aquellos Estados que adoptaron la convención y que, a su vez, reconocieron la competencia contenciosa de la Corte IDH.

En este mismo sentido, Olano (2016) se refirió sobre el control de convencionalidad de la siguiente manera.

El control de convencionalidad en el Sistema Interamericano sirve de paradigma para demostrar que no sólo la ley cumple efectos generales en cada país, sino también las sentencias y decisiones que los comprometen internacionalmente, pasando de un Estado Social de Derecho, de carácter eminentemente nacional, donde impera un control de legalidad y un control de constitucionalidad, a un Estado Convencional de Derecho, en el cual se habla de un Control de Convencionalidad. (p. 63)

Por consiguiente, el control de convencionalidad es un instrumento que se utiliza para controlar que la aplicación de las normas internas de un Estado, sean acordes a las disposiciones emanadas por la Convención Americana de Derechos Humanos con el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales propias de cada individuo. Como bien lo expresaron Brewer y Santofimio (2013):

Ese ha sido y es, precisamente, el control que usualmente ha realizado y realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias cuando, al juzgar las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cometidas por los actos u omisiones de los Estados, ha tenido que confrontar las normas de la misma con las previsiones del derecho interno, de manera que en los casos en los cuales ha encontrado que estas son contrarias o incompatibles con aquella ha ordenado a los Estados realizar la corrección de la inconvencionalidad, por ejemplo modificando la norma cuestionada (p. 23).

Se puede evidenciar en las palabras del autor anteriormente citado, que la aplicación del control de convencionalidad trae como consecuencia que los Estados deban reformar todas aquellas normas o prácticas que se ejecuten en contravía de las prerrogativas contenidas al interior de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin perjuicio claro está, de

las consecuencias internacionales que se les puedan endilgar, por motivo de la vulneración de derechos fundamentales a causa de la expedición de normas que sean contrarias a la Convención.

Esto último, es considerado como el *criterio objetivo* que tiene en cuenta la Corte IDH al momento de juzgar a un Estado que se encuentra bajo su jurisdicción, en virtud de una indebida aplicación del control de convencionalidad. Salinas (2013) define el *criterio objetivo* de la siguiente manera:

Consiste en que para declarar la responsabilidad de un Estado por la expedición de una norma, basta con su simple expedición, sin necesidad de si la misma fue aplicada o no, en virtud del riesgo que crea la vigencia de ésta y por constituir dicha vigencia en sí una violación de la CADH". (pp. 54-55)

Por consiguiente, la aplicación de normas contrarias a las disposiciones contenidas en la Convención Americana involucra de manera contundente la vulneración de derechos humanos, por lo tanto, es deber de los jueces al momento de aplicar dicha normatividad evidenciar no solo, que la misma no sea inconstitucional, sino que, además, que la misma no sea contraria al Tratado Internacional. Esto implica la ejecución de la excepción de inconstitucionalidad y la materialización del control de convencionalidad interno, nacional o difuso como también es conocido cuando se requiera proteger aquellas prerrogativas que son universales e inherentes a todos los individuos.

*[Dada] la imperiosa observancia de la convencionalidad basada en los Derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia decantada por la Corte Interamericana, como criterio interpretativo vinculante, es que se encuentra suficiente fundamento para estructurar el deber jurídico oficioso de las autoridades estatales –y en particular de los jueces- de aplicar la excepción de convencionalidad para favorecer las prescripciones normativas que emanan de la Convención por sobre los actos jurídicos del derecho interno. (...) [Además, éste control es de] aplicabilidad oficiosa e imperativa (Consejo de Estado, radicado 2089236)*

Por su parte, Núñez (2014) explica que el control de convencionalidad estipula que los Estados que ratificaron la Convención, tienen el deber de adecuar sus normas, incluso la Constitución con el fin de que su marco jurídico se encuentre concordante con el Tratado Internacional:

El control de convencionalidad tiene como objetivo lograr la efectividad en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales a través de la interpretación conforme de las normas internas con las obligaciones que impone la CADH. En este sentido, se busca la adecuación de las normas y actos de la autoridad a la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH. (p. 53)

Esto significa, que el control de convencionalidad materializado a través de los pronunciamientos de la Corte IDH trae consigo una fuente que de forma indirecta pretende reformar el marco legislativo propio del Estado e incluso su Constitución, algo que en principio solo le corresponde de acuerdo con los artículos 374° y 375° de la Carta Política al gobierno, al congreso, a los concejales o diputados o al constituyente primario mediante proyecto de acto legislativo, asamblea constituyente o referéndum.

Por otro lado, el control de convencionalidad se diferencia cuando se realiza por parte de la Corte IDH o de los jueces internos, no obstante, independiente de quien lo realice la finalidad es la misma, o sea, la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, “se distingue entre el CCV concentrado (si lo efectúa la Corte IDH), y el difuso (si lo llevan a cabo las autoridades nacionales, es decir, más concretamente, los órganos judiciales)” (Cubides, 2016, p. 63).

En cuanto al control concentrado, se entiende que es la competencia que tiene la Corte IDH en virtud de las disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para determinar si el ordenamiento jurídico interno de un Estado es compatible con el Tratado Internacional o no, y con base en ello, imponer las medidas necesarias para cesar los efectos de las normas que se consideren violatorias y establecer de igual manera, si el Estado es responsable internacionalmente por la violación de las prerrogativas contenidas en la convención. Idrovo (2015) expresa que:

La competencia jurisdiccional, entendida como el control convencional en sede internacional, comprende un mecanismo de control por el cual la Corte IDH determina si el derecho interno de un Estado es incompatible con la Convención Americana u otros tratados aplicables, con la finalidad de aplicar la Convención u otro tratado mediante un examen de confrontación entre los dos sistemas, asegurando de esta forma la efectividad de la supremacía de la Convención Americana a través de un control jurídico y judicial, [...]. (p.21)

Por su lado, (Ferrer, 2012, p. 57, citado por Cubides, 2016, p. 65), indica que el control concentrado de convencionalidad “es el que se refiere a las facultades que tiene la Corte IDH para resolver los casos contenciosos sometidos a consideración, como ya se dijo, haciendo el papel de guardián e interprete final de la CADH”.

Por ende, con la aplicación del control concentrado de convencionalidad es que la Corte IDH determina la responsabilidad internacional en la que incurre el Estado debido a la violación de los derechos humanos por el simple hecho de expedir una norma que vaya en contravía de la Convención Americana sobre DDHH.

En cuanto al control difuso, se entiende que es el examen de compatibilidad que tienen por obligación realizar los jueces internos del Estado al momento de aplicar una norma con el fin de verificar si la misma es concordante con las estipulaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. García (2014) citado por Jiménez (2015) expresó que:

[Lo] pueden y deben realizar todos y cada uno de los tribunales sin distinción, valorando y respetando cada uno de los derechos y garantías establecidos en el catálogo de derechos de la convención, diferencia marcada esta con el control concentrado, el cual es una facultad exclusiva de los jueces de la Corte Constitucional y de la Interamericana. (p.11)

Por su parte, (Ferrer, 2012, p. 123, citado por Núñez, 2014) también da una definición sobre el control difuso de convencionalidad en las siguientes palabras:

En el ámbito interno, el control de convencionalidad consiste en el deber de los/as jueces/zas, órganos de la administración de justicia y demás autoridades públicas, de realizar un examen de compatibilidad entre los actos y normas nacionales y la CADH, sus protocolos adicionales, la jurisprudencia de la Corte IDH y demás instrumentos del sistema interamericano. (p. 17)

Esta definición coloca de relieve nuevamente, que la obligación de observar las determinaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no solo es deber de los jueces, sino que también, es una obligación de todos los órganos del poder público del Estado.

En resumen, el control de convencionalidad es un instrumento que se ha desarrollado a lo largo la jurisprudencia de la Corte IDH, el cual se fundamenta en las obligaciones que le impone la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de protección de todas aquellas prerrogativas que le son inherentes a todos los individuos, Pues como indicó la Corte Constitucional en sentencia C-327/16, M.P. Gloria Ortiz Delgado:

*70.5. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una fuente de derecho vinculante, pues (resumiendo todo lo expresado en un solo punto cardinal) sólo aceptando esa premisa el Estado colombiano puede cumplir de buena fe sus obligaciones convencionales. Además, el riesgo hipotético de que ese carácter vinculante disminuya los estándares internos de protección en aquellos casos en que la jurisprudencia nacional sea más amplia que la interamericana es más bien un problema aparente, dado que toda tensión debería ser resuelta a través del principio pro persona.*

En consecuencia, el control de convencionalidad implica para los Estados el deber de armonizar su ordenamiento interno de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Convención, de no hacerlo implicaría una responsabilidad a nivel internacional ya que las normas que vayan en contravía del Tratado Internacional se convierten en factor de transgresión de los derechos humanos y por lo tanto, si eso llega a suceder el Estado deberá resarcir y reparar íntegramente los perjuicios irrogados a las víctimas.

### **Conclusiones.**

Como ya se ha evidenciado, el control de convencionalidad es un instrumento de aplicación obligatoria para los Estados que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual se fundamenta en las obligaciones adquiridas en virtud de la adhesión al bloque de constitucionalidad de un tratado internacional que tiene fuerza vinculante

Por lo tanto, el control de convencionalidad tiene el objetivo primordial de lograr la protección de los derechos humanos a partir de la armonización de las normas internas de los Estados frente a las estipulaciones de la Convención Americana, esto, con el fin de que las mismas sean compatibles y se genere de esta forma, una salvaguarda mucho más sólida y consolidada de las prerrogativas universales que le son inherentes a todos los individuos.

Por consiguiente, es un deber de los jueces internos al momento de interpretar las normas, hacerlo en concordancia con la convención, realizando para ello un examen de compatibilidad entre el ordenamiento interno y el tratado internacional. De igual manera, es obligación de los jueces tener presente las interpretaciones que la Corte IDH realiza sobre la Convención en su jurisprudencia. En consecuencia, el precedente jurisprudencial del Sistema Interamericano no se puede dejar de aplicar.

Lo anterior implica, que el soslayar la aplicación del control de convencionalidad por cualquiera de los poderes del Estado acarrea consecuencias a nivel internacional que traen repercusiones que afectan de forma grave al Estado, especialmente, en materia económica, ya que la Corte IDH puede generar una condena monetaria con la finalidad de resarcir los daños irrogados a la víctima. Lo anterior, partiendo que uno de los pilares en los que se fundamenta el Estado Social de Derecho además del principio de legalidad, es el principio de responsabilidad patrimonial que implica el resarcimiento de los daños ocasionados por las acciones u omisiones ejecutadas en función de las actividades propias de la Administración Pública.



De igual forma, el expedirse una norma que vaya en contravía de la Convención y que la misma deba ser retirada del ordenamiento jurídico en virtud de una sentencia del tribunal internacional, también genera un gasto patrimonial y procedimental importante, ya que la producción de la norma es un asunto complejo que envuelve diversos factores sociales, económicos y políticos.

En el mismo sentido, al ser demandado el Estado ante instancias internacionales y en caso de que el asunto llegue a la jurisdicción de la Corte IDH para su resolución, envuelve esto un alto costo económico que debe destinar el Estado para su representación y defensa, adicional al presupuesto que tenga que predestinar en caso de sea condenado al pago de una indemnización como consecuencia de la transgresión y violación de los derechos humanos.

Por lo tanto, el cumplimiento del deber de aplicación del control de convencionalidad por parte de los jueces al momento de interpretar y dar aplicación a las normas, del legislativo al producir las leyes y del ejecutivo al realizar sus actuaciones, evita para el Estado considerables gastos económicos que se pueden destinar para el desarrollo de programas sociales.

De igual manera, se evitan las consecuencias internacionales que a nivel político le puede representar problemas, debido a que un Estado que vulnere constantemente los derechos humanos no es bien visto por los demás países, especialmente, por aquellos que brindan una mayor ayuda, cooperación y asistencia en distintos ámbitos con el fin de que el país logre un mayor desarrollo y logre superar una serie de problemas que le puedan estar afectando y que en nuestro caso, puede ser el posconflicto y todo lo que esto demanda.

## **Referencias.**

### **Bibliográficas:**

ACNUDH. (2010). *Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas: comentario*. Nueva York, EEUU: United Nations Publications.

- Agudelo, O. A. & Galán, A. R. (2015). Derecho injusto. Fórmula de universalización y derechos humanos. *Revista Novum Jus*, 9(2), pp. 111-136. Universidad Católica de Colombia. Recuperado de [http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas\\_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/922/969](http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/922/969)
- Amar, J., Macías, A. & Madariaga, C. (2005). *Infancia, familia y derechos humanos*. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte.
- Añaños, K. G. (2016). *El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos y la aplicación de los tratados de derechos humanos en el derecho constitucional peruano*. Tesis doctoral, Universidad de Granada. Recuperado de <http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/42254/1/2564306x.pdf>
- Arango, M. (2004). *El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la corte constitucional colombiana*. *Revista Jurídica Precedente*, edición del 2004, pp. 79-102. Recuperado de <http://www.icesi.edu.co/precedente/ediciones/2004/3ARANGOOLAYA.pdf>
- Arcos, F. (2002). *¿Guerras en defensa de los derechos humanos? Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias*. Madrid, España: Editorial Dykinson.
- Blázquez, F. J. (2013). *Dialéctica de los derechos humanos*. Madrid, España; Editorial Dykinson.
- Botero, (2009). *La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano*, Bogotá, Colombia: Consejo Superior de la Judicatura.
- Brewer, C. R. & Santofimio, J. O. (2013). *Control de convencionalidad y responsabilidad del Estado*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Caicedo, D. A. (2009). El bloque de constitucionalidad en el Ecuador. Derechos humanos más allá de la constitución. *Revista de Derecho FORO*, (12), pp. 6-29. Recuperado de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2296/1/03-TC-Caicedo.pdf>

- Carvajal, J. E. (2015). El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en Colombia. *Justicia Juris*, 11(2), pp. 30-38. Recuperado de <http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/2120/3%20El%20Sistema%20Interamericano%20de%20Protecci%C3%B3n%20a%20los.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Corte IDH. (2013). *ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El qué, el cómo, cuándo, dónde y para qué de la Corte Interamericana*. San José de Costa Rica: Autor. Recuperado de <http://hrlibrary.umn.edu/research/colombia/ABC%20Corte%20IDH.pdf>
- Cubides, J. (Ed.). (2016). *El control de convencionalidad (CCV): Fundamentación e implementación desde e Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. Bogotá, Colombia: Universidad Católica de Colombia.
- Estepa, M. C. (2011). La solución amistosa en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. *Estudios Socio-Jurídicos*, 13(12), pp. 327-352. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v13n2/v13n2a12.pdf>
- Faúndez, H. (2004). *El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales*. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Franco, P. X. (2013) *¿Hacia un nuevo control de convencionalidad?* Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10069/FrancoRodriguezPaXimena2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Idrovo, D. F. (2015). *El control de convencionalidad dentro de la estructura constitucional ecuatoriana: propuestas para su implementación efectiva*. Trabajo de grado maestría, Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado de <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/4463>

- Jiménez, J. S. (2015). *El principio de convencionalidad de la corte interamericana de derechos humanos: un estudio sobre el carácter vinculante para la legislación nacional colombiana*. Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2860/4/EL%20PRINCIPIO%20DE%20CONVENCIONALIDAD%20%20DE%20LA%20CIDH.pdf>
- Medina, C. & Nash, C. (2007). *Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus mecanismos de protección*. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Recuperado de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142609/Sistema-Interamericano-de-derechos-humanos.pdf?sequence=5>
- Medina, C. (2009). Los 40 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz de cierta jurisprudencia de la Corte Interamericana. *Anuario de derechos humanos*, (5), pp. 15-34. Recuperado de <http://www.anuariodh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/11499/11859>
- Mena, M., Montañón, B. A. & Ramírez, B. (2011). *El derecho humano a la integridad personal y el buen trato en los niños y niñas del grado 4,2 de la institución educativa Jaime Salazar Robledo*. Trabajo de grado, Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado de <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2290/323352M534.pdf?sequence=3>
- Monar, Y. F. (2016). *El sistema interamericano de derechos humanos y las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos. Un bloque que goza de fuerza vinculante*. Trabajo de grado especialización, Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7746/1/ARTICULO%20DE%20INVESTIGACION%20YENY%20MONAR.pdf>
- Nikken, P. (2007). La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*,

- pp.161-181. Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/10.pdf>
- Núñez, C. (2014). *Control de convencionalidad: teoría y aplicación en Chile*, Trabajo de grado, Universidad de Chile. Recuperado de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/129769/Control-de-convencionalidad-teor%C3%ADa-y-aplicaci%C3%B3n-en-Chile.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Olano, H. A. (2016). Teoría del control de convencionalidad. *Revista de Estudios Constitucionales*, (1), pp. 61-94. Recuperado de <http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v14n1/art03.pdf>
- Olarte, A. P. (2016). *El bloque de constitucionalidad y principio de convencionalidad: estudio sobre el carácter vinculante de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos y la reforma constitucional de los estados*. Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/4393>
- Rincón, E. R. (2013). ¿Cómo funciona el control de convencionalidad?: Definición, clasificación perspectiva y alcances. *Revista Iter ad Veritatem*, (11), pp. 197-214. Recuperado de [http://www.juecesyfiscales.org/images/stories/articulos/COMO\\_FUNCIONA\\_EL\\_CONTROL\\_DE\\_CONVENCIONALIDAD.pdf](http://www.juecesyfiscales.org/images/stories/articulos/COMO_FUNCIONA_EL_CONTROL_DE_CONVENCIONALIDAD.pdf)
- Rodríguez, J. A. (2016). *Los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad en los sistemas de justicia latinoamericanos: propuesta de un modelo de justicia en El Salvador*. Tesis doctoral, Universidad de Castilla- La Mancha. Recuperado de <https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/8994>
- Ruiz, V. (2011). Derechos humanos y deberes. *En- claves del pensamiento*, (10), pp. 89- 103. Recuperado de <https://repositorio.itesm.mx/ortec/handle/11285/619470>

Salinas, J. P. (2013). *Control de convencionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Alcance y recepción a partir del Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno*. Trabajo de grado, Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/39922/1/1026265422.2013.pdf>

Santoscoy, B. (2007). Las visita *In loco* de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Biblioteca Jurídico Virtual del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM*, pp. 606-628. Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2454/40.pdf>

Suelt- Cock, V. (2016). El bloque de constitucionalidad como mecanismo de interpretación

Sorondo, F. (1998). Los derechos humanos a través de la historia (I). *Cuadernos para docentes*, (3). Recuperado de [http://www.serpaj.org.uy/serpajph/educacion/articulos/ddhh\\_historia\\_1.pdf](http://www.serpaj.org.uy/serpajph/educacion/articulos/ddhh_historia_1.pdf)

#### **Páginas web:**

Oas.org. (2017). *OEA: Comisión Interamericana de derechos humanos*. [Online]. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/> [Consultada el 03 de junio de 2017]

Ohchr.org. (2017) *Breve historia*. [Online]. Disponible en <http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx> [Consultada el 01 de junio de 2017.]

#### **Jurisprudenciales:**

Consejo de Estado, sentencia del 03 de diciembre de 2014, radicado 73001-23-31-000-2003-01736-01 (35413). Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá, Colombia.

Consejo de Estado, sentencia del 09 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-26-000-2014-00143-00. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C- 067 del 4 de febrero de 2003, expediente D-4111. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-488/09, del 22 de julio de 2009, expediente D-7593. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio Delgado. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-458, del 22 de julio de 2015, expediente D-10585. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-535 del 20 de agosto del 2015, expediente T- 4.892.125. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-327, del 22 de junio de 2016, expediente D-11058. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Bogotá, Colombia.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otro Vs. Chile. Sentencia del 26 de septiembre de 2006, (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). San José de Costa Rica.